

Jamaica: elecciones sin opción

Omar Davies

Omar Davies: Economista y sociólogo jamaicano. Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad de las Indias Occidentales, Jamaica.

Desde el 15 de diciembre de 1983, el único partido representado en el Congreso de Jamaica ha sido el Partido Laborista de Jamaica, PLJ, (Jamaica Labour Party), de centro-derecha, en el gobierno desde octubre de 1980.

Esta situación es el resultado de la decisión que tomó el otro partido mayoritario, el Partido Nacional del Pueblo, PNP, (People's National Party) de boicotear las elecciones generales a que llamó el primer ministro Seaga con casi dos años de anticipación al término de su primer período constitucional de cinco años. A pesar de que en Jamaica el plazo máximo para llamar a elecciones es de cinco años, el primer ministro, quien es el jefe del partido de gobierno, puede en cualquier momento llamar a elecciones antes de que se cumpla el período mencionado. Esto es copiado del sistema electoral inglés, al contrario de lo que ocurre en otros países, como EE.UU. por ejemplo, donde las elecciones se realizan a intervalos específicos.

NO A LA MANIPULACIÓN ELECTORAL

Dado que el primer ministro tiene el derecho constitucional de llamar a elecciones en cualquier momento antes de que se cumpla el período de cinco años, la pregunta obvia es ¿por qué el PNP decide boicotear las elecciones? Para responder, es necesario retroceder hasta 1979-80, período en que el PNP estaba en el gobierno. En ese tiempo, los dos grandes partidos empezaron a trabajar en un comité conjunto con el propósito de reducir el grado en que el sistema electoral podía ser manipulado por el partido que estuviese en el gobierno.

Por ejemplo, debido a que la responsabilidad por el sistema electoral es parte de la responsabilidad de un ministro del gobierno, el partido gobernante podría manipular el sistema para su beneficio, cambiando los límites de los cuerpos electorales o retardando la puesta al día de los registros electorales, si considera que la mayoría de los votantes jóvenes le es contraria. Existe una vasta evidencia sobre estas acciones llevadas a cabo por ambos partidos durante los períodos en que han estado en el gobierno.

El objetivo del Comité Conjunto PNP-PLJ es el de diseñar un organismo - que rinda cuentas al parlamento - que tendría toda la responsabilidad del mantenimiento del sistema electoral. Este organismo fue establecido en el año 1980 y aunque no fue agregado a la constitución, le fue asignada una amplia gama de responsabilidades. La más inmediata fue la de desarrollar e implementar un registro electoral confiable para minimizar la incidencia del voto falso (ej., cuando una persona vota más de una vez en la misma elección, suplantando a otros votantes).

La flamante comisión electoral inició su trabajo en 1980, concentrándose primeramente en la preparación de nuevos registros electorales. Sin embargo, a consecuencia de la ruptura del gobierno del PNP con el Fondo Monetario Internacional, y del inmediato llamado a elecciones generales, la violencia política se intensificó y alcanzó niveles sin precedentes. Mientras la violencia crecía durante 1980 con una aparentemente interminable serie de asesinatos, incendios intencionales y sabotajes, los dos grandes partidos acordaron postergar la implementación del registro electoral y realizar las elecciones tan pronto estuviesen listos los registros de nuevos electores. La decisión se basó en la creencia que sólo un gobierno que recibiera un nuevo mandato a través de elecciones generales tendría la autoridad moral para imponer orden en el país.

LA PROTESTA DEL PNP

Luego de las elecciones de 1980 en las que Seaga, encabezando el PLJ consiguió una aplastante victoria (51 asientos en el Congreso contra 9 del PNP), ambos partidos reiteraron su propósito de implementar plenamente los acuerdos sobre reforma electoral. En realidad, una de las declaraciones más publicitadas emergió en mayo de 1982, durante el debate anual en el parlamento sobre el presupuesto. En su intervención en el debate, el líder del PNP, Michael Manley, recordó al gobierno su obligación de llevar adelante las reformas acordadas. Mientras Manley hablaba, el primer ministro Seaga le indicó que no había necesidad de agitar el punto ya que el gobierno tenía la firme intención de cumplir con el acuerdo.

Sin embargo, el mayor diario del país, *The Daily Gleaner*, al referirse al discurso de Manley informó detalladamente sobre sus alcances al gobierno en cuanto a cumplir con sus promesas, pero no mencionó la reconfirmación del compromiso que hiciera el primer ministro Seaga. Al día siguiente, el primer ministro emitió una declaración donde señalaba la agitación sobre la reforma electoral y regañó al periódico por no mencionar su respuesta a Manley. En consecuencia, en diferentes ocasiones, el PNP reafirmó su exigencia de una implementación completa de las re-

formas acordadas, señalando que no participaría en elecciones a menos que éstas se hiciesen efectivas.

A mediados de 1983 se inició el trabajo de confección de los nuevos registros electorales con un sistema de identificación fotográfica. La preparación de la nueva nómina de electores era particularmente importante. Desde que se completó el último registro en 1980, cambios importantes habían ocurrido en la composición de la población de electores. Se estima que durante el período, aproximadamente el 10 por ciento de la nómina antigua había emigrado o muerto, mientras que todos los electores nuevos que habían alcanzado la edad para votar durante los tres años siguientes, no estaban registrados. Se calculaba que este nuevo grupo de votantes ascendía al 15 por ciento de la nueva población de electores. Por lo tanto, el uso de la antigua nómina en 1983 daría simultáneamente oportunidad para un voto falso generalizado, utilizando los nombres de ese 10 por ciento de emigrados o muertos y para negar la oportunidad de votar a un gran porcentaje de jóvenes que tenía derecho a hacerlo.

FARSA PREMEDITADA

Así entonces, cuando el primer ministro Seaga anunció el 25 de noviembre de 1983 que llamaba a elecciones generales utilizando los antiguos registros, y dado el trasfondo del asunto, hubo una gran incertidumbre en torno a la respuesta del PNP. No solamente el sistema electoral no estaba en forma, sino que los nuevos registros - elemento en extremo crítico - no habían sido confeccionados. La incógnita se resolvió el 27 de noviembre, cuando el Consejo Ejecutivo Nacional del PNP decidió boicotear las elecciones llamadas para el 15 de diciembre de 1983.

Es así como las elecciones se convirtieron en una farsa, ya que sólo 6 de los 60 candidatos del PLJ enfrentaron cierta oposición durante el evento. La oposición vino de candidatos independientes o de representantes de partidos menores. Los demás fueron elegidos sin oposición. De los seis distritos donde se efectuó la "elección", sólo en uno hubo una justa verdadera. El resultado final fue que el PLJ logró controlar todos los sesenta escaños del Congreso. Este estado de cosas no tiene precedentes en la historia política de Jamaica desde que se introdujo el sufragio universal (un voto por cada adulto) hace cuarenta años. Las diferentes variantes negativas que podrían resultar nos obligan a plantear la siguiente pregunta: ¿Por qué el primer ministro Seaga no cumplió con su palabra de poner en servicio el nuevo sistema electoral? Tratamos de responder esta pregunta como sigue.

EL GOBIERNO DEL PLJ DESDE 1980 A 1983

La decisión del primer ministro Seaga de llamar a elecciones generales con dos años de anticipación se basa en el hecho de que las oportunidades para él ser reelegido empeoraban con el tiempo. Su rol destacado durante la invasión a Granada encabezada por los EE.UU. detuvo temporalmente el descenso de la popularidad del gobierno del PLJ. La combinación de estos dos factores sustenta esta decisión y obviamente el Sr. Seaga creyó que la posible recompensa de un nuevo período en el gobierno compensaba con creces las reacciones negativas a su decisión de llamar a elecciones.

El descenso de la popularidad del gobierno del PLJ emanaba fundamentalmente de las difíciles condiciones económicas que enfrenta la mayoría de la población, particularmente desde comienzos de 1983. La recesión de las economías capitalistas mundiales había contribuido a la baja de la economía de Jamaica, aunque la mayor parte de la culpa la tienen las políticas erradas del régimen de Seaga.

Habiendo llegado al poder con una mayoría abrumadora, el gobierno del PLJ anunció una política de eliminación de controles en la economía y de entrega de toda la responsabilidad del crecimiento económico en las manos del sector privado. Estas políticas fueron parte de un crédito de fondos adicionales durante un período de tres años que el gobierno de Jamaica firmó con el Fondo Monetario Internacional en marzo de 1981. La política de eliminación de controles implicaba el fin de la mayoría de las restricciones de importación, control de precios y protecciones a los productores nacionales. La implementación de esta política fue apoyada no sólo con préstamos del FMI sino por una inyección sin precedentes de fondos provenientes del gobierno de los EE.UU. cuando el presidente Reagan asumió el poder en 1980, justo una semana después que Seaga.

FRACASO DEL MODELO ECONÓMICO

Muchos creen que la redacción del crédito de fondos adicionales firmado con el FMI reflejó la influencia del presidente Reagan, ya que los duros ajustes económicos que generalmente se exigen de los receptores, en un comienzo fueron demorados. No obstante, el convenio fue un documento técnicamente defectuoso que justificaba la liberalización de las políticas de importación y el correspondiente aumento en la cantidad de divisas que se necesitaba para financiar las importaciones adicionales, basándose en locas proyecciones del aumento de las ganancias por concepto de producción y exportaciones.

Los siguientes son ejemplos de las proyecciones del acuerdo con el FMI:

A la industria de la bauxita y la alúmina, que produce los dos tercios de los ingresos visibles de divisas del país, se le proyectó un crecimiento de 12 millones de toneladas en 1980 a 18 millones de toneladas en 1983. Un aumento del 50 por ciento. En la realidad, la producción descendió a 8 millones de toneladas en 1983. En la producción de azúcar, que era de 260 mil toneladas en 1980, se calculó llevarla hasta 330 mil toneladas en 1983. En realidad, cayó por debajo de las 200 mil toneladas. Igualmente, se demostró que los cálculos sobre las exportaciones de productos manufacturados, los ingresos por concepto del turismo y la creación de empleos fueron irreales y exageradamente ambiciosos.

Mientras se erraba respecto a las metas de producción, la otra cara del acuerdo se implementaba a toda velocidad. Respecto de la eliminación de las restricciones a las importaciones, el aumento del déficit comercial (importaciones menos exportaciones) suministra el mejor ejemplo del alcance que se perseguía con esa política. El déficit se mantenía en 213 millones de dólares en 1980. Durante 1981, el primer año del régimen de Seaga, éste ascendió a 503 millones de dólares y a 617 millones en 1982.

Inexorablemente, las negativas consecuencias de esta política empezaron a hacerse evidentes. Primero, se produjo una baja en la producción agrícola, ya que los agricultores reaccionaron ante el flujo de importaciones baratas de alimentos. Sin embargo, y quizás lo más grave, fue la presión sobre el dólar jamaicano, ya que los importadores competían entre ellos para comprar en el mercado negro dólares norteamericanos. La admisión pública sobre el fracaso de la política económica se hizo en enero de 1983, cuando el primer ministro anunció el reconocimiento del mercado negro, denominándolo mercado paralelo de divisas.

SEVERAS RESTRICCIONES

Dentro de este esquema, a los bancos comerciales se les permitió comprar y vender divisas a tasas determinadas por la fuerza del mercado, al tiempo que el gobierno mantenía un cambio oficial de 1.78 dólares jamaicanos por dólar. Al momento de introducir el mercado paralelo, el gobierno señaló que menos del 20 por ciento de las necesidades de importación del país serían cubiertas por el mercado paralelo.

Este cálculo fue cuestionado por muchos en ese momento y en menos de seis meses el gobierno se vio forzado a revisar sus cálculos y colocó todas las importacio-

nes, incluso el petróleo, en el mercado paralelo. Sin embargo, antes de esto, en marzo de 1983 el gobierno había fallado en uno de los "exámenes" habituales que son parte de los acuerdos con el FMI. Aunque se solicitó y obtuvo un desestimiento, se necesitó implementar severas medidas económicas, incluso drásticos cortes en el presupuesto nacional y de alzas de precios de una variedad de productos, entre los cuales el más importante fue la gasolina.

Entre tanto, el valor del dólar jamaicano continuaba erosionándose, ya que el ingreso del mercado paralelo demostró ser insuficiente para cumplir con la demanda de los sectores competitivos. La imposibilidad de algunas empresas de conseguir divisas para la importación de materias primas, condujo a un aumento en el número de cierres y redujo la semana laboral, agravándose aún más la situación del desempleo.

La combinación de todos estos factores aumentó la impopularidad del gobierno del PLJ. Una encuesta ordenada por ese partido y realizada por el primer experto del país, el profesor Stone, reveló que el partido sería derrotado en las elecciones. Y aún peor, planteó que la situación empeoraría aún más para el PLJ. Y así fue, ya que el gobierno fracasó una vez más en un "examen" del FMI en el mes de septiembre.

Los sucesos de Granada desviaron la atención de los problemas locales durante un breve período. Incluso, detuvieron la caída de la popularidad del gobierno del PLJ. No obstante, a fines de noviembre la situación había llegado a tal extremo que el primer ministro Seaga se vio obligado a anunciar una devaluación formal del dólar jamaicano (3.50 por dólar). Mientras la devaluación sólo comenzaba y seguía una serie de aumentos de casi todos los productos, Seaga decidió correr el riesgo de una condena por incumplimiento de su palabra, e intentó aprovechar los sucesos de Granada para ayudarse en su intento de ser reelegido.

LA SITUACIÓN ACTUAL

La ola de alzas esperadas cubrió casi todos los productos, particularmente el transporte y la electricidad. El precio de la gasolina aumentó un 93 por ciento en un período de seis meses, de junio a diciembre de 1983, mientras que las tarifas eléctricas subieron en 40 por ciento. Hubo también aumentos equivalentes en una amplia gama de artículos de primera necesidad.

La atmósfera económica podría caracterizarse como de incertidumbre, al tiempo que un nuevo acuerdo con el FMI anunciado por Seaga para entrar en vigencia el 1° de enero de 1984, aún no se ha concretado. Se rumorea que el FMI exige reducciones masivas en la burocracia estatal, como también en las importaciones.

Políticamente, la decisión del PNP de boicotear las elecciones lo ha revitalizado y ha recuperado toda o casi toda la popularidad que perdió durante y después de la invasión a Granada. En todo caso, las actuales penurias económicas, que tienden a empeorar, por lo menos aseguran una mayor erosión de la popularidad del PLJ. Muchos creen que en cuanto se terminen los nuevos registros electorales, la presión del público, sumada al deterioro de la situación económica, obligará al gobierno a llamar a nuevas elecciones. En tal caso, éstas se realizarían este año. Por otra parte, están aquellos que creen que el PLJ tratará de retener el poder por el mayor tiempo posible, con la esperanza que las cosas mejoren. Si sigue este último rumbo, esto sólo aumentaría la incertidumbre ya que todo el mundo espera ver qué es lo que va a pasar. Como sea, 1984 será un año lleno de acontecimientos en la historia de Jamaica.